

OCURSO DE GRACIA "INDULTO"

Delito de Condena:	Homicidio Agravado, tipificado y sancionado en el Artículo ciento veintinueve numero uno, en relación con el artículo veinte del Código Penal.
Solicitantes:	Lic. DENNIS ESTANLEY MUÑOZ ROSA Licda. ELSA DANIELA RAQUEL RAMOS PEÑA PATRICIA ISABEL OLMEDO ALAS MORENA SOLEDAD HERRERA ARGUETA SARA BEATRIZ GARCIA GROSS ANGELICA MARIA RIVAS MONGE JORGE ARMANDO MENJIVAR ZAMORA LUZ VERONICA SALAZAR BELTRAN IRMA JUDITH LIMA BONILLA LILIAN ALEJANDRA BURGOS CORNEJO
Condenada:	ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS
Víctima:	Su hijo Recién Nacido

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Leído en el Pleno Legislativo el:

Firma: _____

ASAMBLEA LEGISLATIVAGerencia de Operaciones Legislativas
Sección de Correspondencia Oficial

HORA: 12:50h

Recibido el: 01 ABR. 2014

Por: **HONORABLE
ASAMBLEA LEGISLATIVA.**

DENNIS ESTANLEY MUÑOZ ROSA, de treinta y cuatro años de edad, Abogado, de este domicilio, con carné de Abogado número: once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro; **ELSA DANIELA RAQUEL RAMOS PEÑA**, de treinta y dos años, Abogada, del domicilio de Santa Ana, con carné de abogada veintitrés mil quinientos cincuenta y dos, **PATRICIA ISABEL OLMEDO ALAS**, de treinta y un años de edad, estudiante, del domicilio de Suchitoto, que me identifico con número de Documento Unico de Identidad número: cero un millón trescientos veintidós mil seiscientos cincuenta y seis guión ocho, **SARA BEATRIZ GARCIA GROSS**, de veintisiete años, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio Chalchuapa, que me identifico con número de Documento Unico de Identidad número: cero tres millones cuatrocientos catorce mil quinientos cuatros guión cuatro, **ANGELICA MARIA RIVAS MONGE**, de treinta años de edad, estudiante, del domicilio de Santa Ana, que me identifico

con número de Documento Unico de Identidad número: cero un millón cuatrocientos ochenta y ocho doscientos catorce guión siete, **MORENA SOLEDAD HERRERA ARGUETA**, de cincuenta y tres años de edad, Licenciada en Filosofía, del domicilio de Suchitoto, que me identifico con número de Documento Unico de Identidad número: cero dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos noventa guión cero, **JORGE ARMANDO MENJIVAR ZAMORA**, de treinta y cuatro años edad, estudiante, del domicilio de Suchitoto, que me identifico con número de Documento Unico de Identidad número: cero un millón quinientos cuarenta siete mil trescientos veintitrés guión cuatro, **LUZ VERONICA SALAZAR BELTRAN**, de cuarenta y una años de edad, empleada, del domicilio de Suchitoto, que me identifico con número de Documento Unico de Identidad número: cero dos millones quinientos ochenta mil trescientos cuarenta y uno guión cinco, **IRMA JUDITH LIMA BONILLA**, de treinta y un años de edad, Licenciada en Relaciones Internacionales, del domicilio de San Salvador, que me identifico con número de Documento Unico de Identidad número: cero un millón ciento treinta y un mil doscientos veinticinco guión ocho, **LILIAN ALEJANDRA BURGOS CORNEJO**, de veinticinco años de edad, estudiante, del domicilio de San Vicente, que me identifico con número de Documento Unico de Identidad número: cero cuatro millones noventa mil ciento cuarenta y siete guión cuatro; señalando lugar para oír la siguiente dirección: Calle Gabriela Mistral, Colonia Buenos Aires 2, No.224, San Salvador, El Salvador, o al telefax 2226-0356.; y en base al artículo ciento treinta y uno ordinal vigésimo sexto de la Constitución de la República y a los artículos trece, catorce, quince, diecinueve y veinticuatro, de la Ley Especial de Ocurros de Gracia, en nombre de la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, de veinticinco años de edad, soltera, desempleada en el momento de su condena, del domicilio del Puerto de la Libertad, Departamento de La Libertad, analfabeta, tienen 2 hijos, con el debido respeto **EXPONEMOS:**

D) REFERENCIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA:

Que con fecha quince de julio del dos mil diez a las catorce horas, en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, se dictó la Sentencia Definitiva en el Proceso Penal clasificado con el Número de Causa: **220-1-2010**, contra la acusada: **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, procesada por el delito de **HOMICIDIO AGRAVADO**, y consecuentemente condenada por unanimidad de los miembros del Tribunal, a la Pena de **treinta años de Prisión** como autora directa por delito antes referido, en perjuicio de su hija Recién nacida, Dicho delito se encuentra

previsto y sancionado en el Art. 129 No. 1 con relación con los Arts.128, ambos del Código Penal.

Habiendo intervenido como partes, en representación de la Fiscalía General de República, la Licenciada SILVIA ESTELA SACA DE ALAS; y representando los intereses de la acusada el Defensora Pública la Licenciada LILIAN DEL CARMEN PORTILLO VARGAS y el Licenciado JUAN CARLOS CABALLERO MEJIA.

Todo lo anterior, según Certificación de la Sentencia Definitiva del expediente número: **220-1-2010**, expedida por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil doce.

Así mismo es de mencionar que la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, de generales expresadas anteriormente se encuentra en la Fase de Ejecución de la Pena en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla.

II) EXPOSICION DE LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA GRACIA DEL PRESENTE INDULTO:

1) Es de tomar en cuenta que nuestra legislación Penal en el Art. 5 del Código Procesal Penal vigente, en el juzgamiento de **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, no fue tomado en cuenta y las dudas se robustecieron en razón que nunca hubo testigos presenciales de que ella hubiera provocado el homicidio de su hijo recién nacido y tuvo el Tribunal condenador que especular para arribar a tal afirmación, sobretodo porque sí bien es cierto que la acusada y condenada posteriormente rindió su declaración indagatoria, no significa que haya quedado clara la acción, dado que aparece en la sentencia definitiva a folio 137 frente en su declaración indagatoria, respecto del hecho ocurrido el día 23 de diciembre de 2009, en el momento que tuvo un parto extrahospitalario y que según el Instituto de Medicina Legal, la víctima recién nacido murió a causa de un Trauma Craneoencefálico Severo, de tipo contuso más compresión el cuello, es por ello que la acusada dijo: *".....Su embarazo nunca lo ocultó, era su hijo también. Sus hijas se la llevan al penal para verlas. Acababa de perder a su mamá y como iba a perder a su hijo también. Ella estaba sola cuando de repente le vinieron los dolores. Había ido al centro a comprar unas cosas. Le dicen que ella lo pudo haber matado, pero ella no lo mató. Sí ella lo hubiera matado lo hubiera planeado desde que supo que estaba embarazada. Platicaba con su mamá que iba a sacar adelante a sus 3 hijos y a su hermana. Esa hermana es enferma, su mamá se la dejó a su cargo cuando murió. Ella se desmayó en el suelo, cayó*

no supo qué sucedió, de desmayó, hay ciertas partes que ella no se recuerda. Dicen que su bebé tenía unas heridas, pero ella no se las vio. Si hubiera planeado matarlo lo hubiera hecho desde un principio, porque estaba en el hospital con su mamá en el hospital de Santa Ana”.

De la declaración de **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, se advierte que estamos en presencia de una mujer joven sola, desorientada que tuvo un parto vaginal extrahospitalario sin asistencia médica, y que tuvo una complicación obstétrica, que no supo manejar el momento del alumbramiento como lo hubiera hecho una partera o el personal de salud calificado, sin embargo algo que llama la atención además, es que la testigo **MARIA TERESA FUENTES DE RODRIGUEZ** a folio 139 frente del expediente manifestó entre otros hechos, “...*Ese día le dijo que le dolía la cabeza. Cuando le abrió le vio las manchas de sangre y ella le dijo que había echado una pelota. En la bolsa estaba un niño, lleno de sangre, donde lo leste lo iba a vantó le salía sangre de la nariz, el cuello lo tenía morado. La testigo le dijo que iba a llevar y Alba le dijo que sí. La testigo se lo llevó a su casa, le echó alcohol. Le oía algo en pechito, pensó que estaba vivo, le trato de auxiliar. Le echo alcohol en la cabeza, luego le cortó el ombligo, todo lo tenía, la placenta y cordón umbilical. Ya no hizo ruido. El niño pasó como media hora haciendo ruiditos. La testigo se puso bien mal y no le habló a Alba. Se puso mal porque nunca había visto nada así. Se veló al bebé en la casa de oración a la para de la casa de la testigo, toda la noche. El siguiente día cuando les dijo a los muchachos que lo enterraran le dijeron que no, qué tenían que avisar al Instituto de Medicina Legal. La testigo llamó a la policía. Lo vio morado en la espalda, cuello posterior y el pecho.....”*

La testigo varios elementos que son tienen relevancia jurídica, porque cuanto según su dicho, ella intervino cuando todavía según la testigo estaba vivo el bebé, sin embargo, no llamaron de inmediato a la policía, sino que esperaron velarlo toda la noche del 23 de diciembre del 2009, contaminando totalmente la escena del supuesto delito cometido por **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, en virtud de no haber dado la información oportuna, pero lo peor no es eso, se denota que la referida testigo **MARIA TERESA FUENTES DE RODRIGUEZ**, hizo actos propios con un objeto corto punzante, dado que le corto el ombligo, en tal sentido, ante la inexistencia directa de que la acusada había cometido el delito, a juicios de las y los ciudadanos solicitantes de este INDULTO a favor de la condenada cave la duda razonable que **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, haya cometido el delito por el cual le condenaron, imperando en tal sentido las conjeturas y las presunciones, como ocurre en esta clase de casos.-

2) LA EVIDENTE APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD POR EL TRIBUNAL CONDENADOR: bajo el Principio de Legalidad, en el proceso penal, solo se le puede acusar a alguien en razón de un hecho constitutivo de delito, conforme a los principios y presupuestos procesal ((NULLUN CRIMIN, NULA POENA), en el caso de la condena en contra de **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, a continuación citamos los pasajes de la sentencia definitiva condenatoria en la cual dejan al descubierto que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla tuvo que presumir la culpabilidad de la procesada en aquella época que tuvieron el expediente en sus manos: a folios 141 frente del expediente judicial, dice: **“El presente caso la prueba aportada constituye prueba indiciaria. Los indicios en doctrina.....Los indicios acreditados son varios y provienen de diferentes fuentes y son lo siguientes: 1. Que la única persona que pudo haber dado a luz a este menor es la señora Alba Lorena Rodríguez Santos. 2. El bebé, víctima nació vivo. 3. Al nacer la única persona que tuvo contacto con este recién nacido es precisamente la señora Alba Lorena Rodríguez Santos. 4. Cuando la señora María Teresa Fuentes de Rodríguez el bebé ya estaba agonizando y presentaba lesiones descritas en autopsia lesiones craneoencefálico de tipo contuso y compresión de cuello. 5 Las lesiones contusas y de compresión que presentaba el bebé eran extensas y se encuentra ubicadas en regiones corporales en las que no pueden haberse producido accidentalmente, de allí que se concluye que fueron producidas intencionalmente y 6. Fueron estas lesiones las que causaron la muerte del bebé recién nacido. Sí bien es cierto un solo indicio no es prueba, una pluralidad concordante resulta concluyente, para tal efecto el enlace entre el hecho - base y el hecho – consecuencia debe ser preciso y directo, se fruto de una deducción, no de una mera suposición o lo que es lo mismo, que la inferencia sea correcta y no arbitraria y que el mencionado enlace sea racional, coherente y sujeto a las reglas de la lógica y la experiencia. De los Indicios acreditados la única conclusión a la que se puede arribar es que la señora Alba Lorena Rodríguez Santos fue quien le ocasionó la muerte la a su hijo recién nacido, al causarle un trauma craneoencefálico severo de tipo contuso y también realizar la compresión de cuello y que la señora Rodríguez Santos es la madre de la menor víctima”.**

De lo anterior se desprende la injusticia respecto de la condena de **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, solo pudo llegar a la afirmación que el homicidio agravado de su hijo había sido ocasionado por ella, pero lo que llama la atención es que el mismo Tribunal

condenador confiesa utilizar únicamente prueba indiciaria, lo cual lo hizo de manera precipitada, en razón de una clara aplicación de **PRESUNSIÓN DE CULPABILIDAD**, la cual por su puesto está lejos de una autentico ESTADO DE DERECHO, en razón de existir al contrario la **PRESUNSIÓN DE INOCENCIA**, totalmente contrario a un DEBIDO PROCESO, y es más al imperar de dudas estas solo tendrían que operar únicamente a favor de quien tiene el rol de acusada o acusado, es decir que **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, NO DEBIO HABER SIDO CONDENADA POR DEDUCCIONES O INFERENCIAS, COMO ES LO QUE OCURRIO EN ESTE CASO, cuya consecuencia de esto son 30 AÑOS DE CARCEL PARA **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**.-

Todo lo anterior se evidencia más en razón de que en la sentencia condenatoria no se desarrolló ningún apartado respecto de la forma de realización de los hechos, esto significa que no esta fundamentada la acción, omisión o comisión.-

3) Las aberraciones jurídicas que tienen como bases los hechos no han terminado en la Sentencia definitiva condenatoria, dado que específicamente en el folio 143 vuelto del expediente, se encuentra el desarrollo de la letra "E" **CULPABILIDAD** y en la letra b) EL Conocimiento de la antijurídica el primer párrafo "**de los hechos cometidos: la norma penal solo puede motivar a la persona en la medida en que ésta pueda comprender a grandes rasgos el contenido des sus prohibiciones. El señor ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS, tenía el contenocimiento que la conducta de disparar a una persona es prohibido por la ley**" Al respecto el Tribunal condenador a fundamentado la culpabilidad, en una acción inexistente, por cuanto en el caso que nos ocupa, **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, nunca ha disparado contra nadie, y ni si quiera es un hecho acreditado ni para la acusación fiscal y mucho menos sometido al control punitivo del Estado, de tal suerte que se ha plasmado en la sentencia algo inexistente lo cual no extraña, en razón de la presunción que ha desarrollado el Tribunal condenador, es por ello funcionarios y funcionarias que conocerán de esta solicitud de INDULTO, pedimos que sea considerado este puesto tan trascendental que aparece en la sentencia condenatoria que le implicará a **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS CONDENADA A TREINTA AÑOS DE SU VIDA EN UNO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS MAS HACINADOS DE AMERICA LATINA** .-

4) Analizando la Sentencia definitiva en la parte del Fallo de la misma, en donde aparece que **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, privada de libertad desde el veinticuatro de

diciembre del año de 2009, *cumplirá su pena total el día veinticuatro de diciembre del dos mil treinta y nueve*". Es obvio pensar que de cumplir la pena total impuesta la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, saldría del sistema penitenciario a la edad aproximada de cincuenta y dos años de edad, y que su vida productiva, familiar, emocional y social serían afectadas de esta manera, tomando en consideración todas las causas que dieron lugar a su condena, por lo tanto la condenada señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, merece en todo sentido indulgencia una vez analizado desde la óptica de justicia y equidad, la presente solicitud de Indulto.

5) En el caso que nos ocupa, **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, fue detenida, investigada y juzgada bajo una presunción de culpabilidad, en violación del principio de presunción de inocencia. En el terreno penal, el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. Concretamente, la presunción de inocencia "implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable".

A **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS** le fue violado su derecho a la presunción de inocencia desde el primer instante. Cuando llegó al hospital como paciente que acababa de tener un parto espontáneo, el personal de salud que la atendió en estado de shock y con una fuerte hemorragia, fue denunciada por tener señales médicas claras de haber estado embarazada pero no tener un feto o embrión en su útero.

El personal de salud en El Salvador debe tener conocimiento médico de que tanto en un aborto espontáneo como en un parto precipitado es posible que se expulse todo el producto de la gestación sin que la mujer gestante tenga ningún control sobre ello. Sin embargo, se optó por ignorar todos esos datos médicos básicos, para conjeturar en su lugar que **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, se había producido un aborto voluntario, y así denunciarlas violando su deber de secreto profesional, sin tomarse el trabajo de presentar las posibilidades del cuadro clínico de manera completa, ignorando factores como la preeclampsia grave, la hemorragia, el estado de inconsciencia, etc. que podía haber tenido injerencia directa en las condiciones de lo sucedido y explicaban su inocencia.

6) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, y que dicho derecho “debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”, buscándose “proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona”.

Para el momento de los hechos, el caso respecto del que solicitamos se conceda el indulto, el Código Procesal Penal de El Salvador establecía los recursos de revocatoria, apelación, casación y revisión. El recurso de revocatoria, sólo procedía contra las decisiones que resolvieran un trámite o incidente del procedimiento, a fin de que el mismo tribunal que las dictó las revocara o modificara. El recurso de apelación a su vez, sólo procedía contra las Resoluciones de los jueces de paz y de los jueces de instrucción, siempre que fueren apelables, pusieran fin a la acción o imposibilitaran su continuación y además, causaran un agravio a la parte recurrente; según esto, sólo las resoluciones sobre la detención preventiva, y la decisión que dio apertura a la etapa de instrucción en el proceso podía ser apelada. El recurso de casación, único recurso disponible contra un fallo condenatorio de primera instancia sólo procedía cuando la sentencia se basaba en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, consagrándose además, un número taxativo de defectos de la sentencia que podían dar lugar a la utilización de este recurso. El artículo 362 del entonces vigente Código Procesal Penal establecía.

Dicha norma es virtualmente igual a la del extinto régimen procesal penal de Costa Rica que no contenía la posibilidad de apelar y restringía cualquier posibilidad de revisión de la sentencia a la interposición del recurso de casación, llevando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a declarar una violación del derecho a recurrir de un fallo condenatorio consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana en el caso Herrera Ulloa.

En el caso referido, la Corte estableció que “el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo”. En este mismo sentido, la Corte determinó que “[L]a posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho”, y que sin importar la denominación que se le dé, “lo importante es que dicho recurso garantice una examen integral de la decisión recurrida”.

Basándose en lo anterior, la Corte Interamericana se dispuso a analizar si el recurso de casación satisfacía el derecho de recurrir un fallo, concluyendo que no, por cuanto el mismo no satisfacía “el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior”.

Al momento en que fue condenada **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, la única posibilidad de recurrir el fallo era mediante un recurso –el de casación- que por su tecnicismo y especificidad en torno a las condiciones que permitían activarlo, hacían que el mismo no satisficiera el derecho de que una instancia superior revisara integral y comprensivamente todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. La falta de una norma que regulara la posibilidad de un recurso ordinario que permitiera recurrir el fallo condenatorio, privó a estas mujeres del derecho a revisar la integralidad de las pruebas y la narrativa e imputación de los hechos construida por la Fiscalía.

7) Respecto del motivo número 5, sobre discriminación y estereotipos de género:

El Comité de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha manifestado que “[P]uede haber discriminación indirecta contra la mujer cuando las leyes, las

políticas y los programas se basan en criterios que aparentemente son neutros desde el punto de vista del género pero que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer. Las leyes, las políticas y los programas que son neutros desde el punto de vista del género pueden, sin proponérselo, perpetuar las consecuencias de la discriminación pasada. Pueden elaborarse tomando como ejemplo, de manera inadvertida, estilos de vida masculinos y así no tener en cuenta aspectos de la vida de la mujer que pueden diferir de los del hombre. Estas diferencias pueden existir como consecuencia de expectativas, actitudes y comportamientos estereotípicos hacia la mujer que se basan en las diferencias biológicas entre los sexos. También pueden deberse a la subordinación generalizada de la mujer al hombre” (énfasis agregado). Como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es “posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción que otras tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la auto-identificación de la víctima”.

La conexión entre discriminación contra la mujer y estereotipos de género es un reconocimiento de las raíces culturales y estructurales de la discriminación que sufren las mujeres y que es preciso eliminar para materializar el derecho de igualdad. Ésta conexión ha sido reflejada principalmente en el corpus juris de protección de los derechos de la mujer en la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (en adelante, “la CEDAW”) que en su artículo 5 obliga a los Estados a tomar medidas para “[M]odificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Como ya se expuso, esta conexión también está presente en los artículos 6.b y 7 literales “a” y “e” de la Convención de Belém do Pará.

En ésta misma línea, es relevante atender al reconocimiento en el corpus iuris de los derechos de la mujer (particularmente en la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , así como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer), de que para eliminar la discriminación contra ésta, los Estados deben eliminar los patrones socioculturales que imponen roles de género sobre hombres y mujeres apelando a una noción dicotómica de inferioridad/superioridad entre éstos.

Esta discriminación indirecta contra la mujer es frecuente en el área de la salud, y particularmente en el área de la salud reproductiva. En este punto es fundamental revisar lo dicho por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General sobre la mujer y la salud, en relación a las obligaciones de los Estados respecto del artículo 12 de dicha Convención que obliga a tomar “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica”. La discriminación indirecta contra las mujeres en el área de la salud por cuenta de estereotipos ha sido reconocida por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que ha concluido que “el pensamiento estereotipado acerca de la mujer... ha permeado la atención de salud en general, y la atención de salud reproductiva en particular”.

Lo que contiene la lógica del personal de salud y los médicos legistas de casos como el de **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, es un estereotipo sobre los sacrificios sobrenaturales que supuestamente vienen con la maternidad, que se revela en que los mismos, porque consideraron que si estas mujeres llegaron al hospital sin auxiliar a los productos fue porque carecieron de instinto maternal. Este estereotipo de género que discriminó a **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, fue el del “instinto de madre”. Según este estereotipo.

Recientemente, el Comité de la CEDAW decidió el caso de L.C. v. Perú, el caso de una niña que tras años de abuso sexual intentó suicidarse tras quedar embarazada, arrojándose del techo de una casa vecina; necesitando una cirugía de columna urgente, los médicos que la atendieron prefirieron sacrificar la posibilidad de que L.C. recupera movilidad en su cuerpo y no realizaron la cirugía para no correr el riesgo de dañar el proceso de gestación. El sacrificio que en nombre de “la maternidad” se esperaba hiciera L.C., llevó al Comité a concluir que se había violado el artículo 5 de la CEDAW que obliga a los estados a “[M]odificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Concretamente, el Comité estableció que “la decisión de aplazar la intervención quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer sobre la salud de la madre”.

8) El derecho de toda persona a que se respete su vida (artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) a la luz de las obligaciones genéricas de respeto y garantía consagradas en el artículo 1.1 de la Convención, no sólo entraña una obligación negativa para El Salvador en términos de no realizar acciones encaminadas a privar arbitrariamente de la vida a alguien, u obstaculizar el goce de tal derecho, sino que entraña también una obligación positiva a la luz de la obligación general de garantía de los derechos humanos, que implica la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida . Ésta obligación de proteger el derecho a la vida de las personas que viven bajo su jurisdicción involucra a toda institución estatal de El Salvador . Es por tanto una obligación de todas las instituciones públicas del Estado el crear condiciones necesarias para que las personas puedan gozar y ejercer plenamente éste derecho incluyendo **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, antes del proceso penal que atravesó parto extrahospitalario. A su vez, el derecho a la integridad física, psíquica y moral (artículo 5.1 de la Convención Americana) también genera para El Salvador obligaciones de tipo positivo y negativo respecto de todas las personas que viven bajo su jurisdicción, implicando para dicho Estado, la obligación de respetar, proteger y garantizar dicho derecho.

La Corte Interamericana ha establecido además, una conexión existente entre el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida y el derecho a la salud. En el caso Albán Cornejo y Otros Vs. Ecuador la Corte dijo que la “integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana”

9) En atención al Artículo 8 de la Constitución de la República de El Salvador que al tenor de lo literal dice: “*Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda y a privarse lo que ella no prohíbe*”, en un análisis breve dentro de un contexto jurídico, esto se traduce en dos aspectos significativos: 1) Que el sujeto sea éste gobernante o gobernado si no existe un imperativo categórico que le establezca un modo de actuar, perfectamente esta cumpliendo la Ley; y 2) Si no existe una prohibición expresa o tácita establecida por la Ley, el gobernante o gobernado no esta obligado a privarse de cualquier actuar apegado a la Ley, porque esta no lo prohíbe. Tomando como hito esta pequeña reflexión, su digna autoridad tal como lo establece el Artículo 131 Ordinal 26 en su parte final de la Constitución de la República: “Corresponde a la Asamblea Legislativa... “*Conceder Indultos, previo informe favorable de la Corte Suprema de*

Justicia". Esto implica que en su calidad de autoridad administrativa, hasta la Ley Suprema de nuestro ordenamiento jurídico le permite que pueda otorgar el Ocurso de Gracia a un determinado solicitante, siempre y cuando cumpla con los presupuestos de Ley, descritos en la Ley Especial de Ocurso de Gracia y en la misma carta magna; significando esto que como Órgano Legislativo a través de un acto administrativo queda a su discrecionalidad el conceder el Indulto a la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, siempre y cuando tenga a bien resolver en beneficio de éste, en atención al caso sui generis, con todos los errores jurídicos que presenta.

10) Cabe resaltar que en el presente Indulto, haciendo alusión a la definición de dicha figura jurídica, la cual es en definitiva un perdón que el órgano legislativo le otorga a una persona condenada por un determinado delito, en donde el hechor o sujeto activo esta desprendido de toda actividad política dentro del Estado donde se encuentra o desarrolla su vida como un ciudadano común y corriente. Advirtiendo la definición anterior, es atinado que en ningún momento ninguna de las Instituciones involucradas directa o indirectamente para conocer del presente Ocurso de Gracia puedan ni deban confundir esta figura jurídica con un Recurso de Revisión de Sentencia Definitiva, en virtud que desde el campo de aplicación de la Ley son distintas ambas figuras, así como los entes o sujetos aplicadores de la misma, siendo en este caso que el Recurso de Revisión mencionado le corresponde resolver su procedencia al Tribunal que dicto la sentencia condenatoria, quien por cierto no intervendrá en la resolución del presente Ocurso de Gracia, implicando esto un rol supra importante en las instituciones estatales que entran o se involucran en el presente, es decir por parte del Órgano Ejecutivo: El Consejo Criminológico Nacional; por el Órgano Judicial: La Honorable Corte Suprema de Justicia; y por el Órgano Legislativo: La Honorable Asamblea Legislativa; reflejando un concierto de voluntades y acuerdos de carácter administrativos y dando vida a teorías como la Separación de Poderes del Estado, en donde cada uno actúa dentro del marco de la discrecionalidad que deviene de las facultadas y atribuciones plasmadas en la Constitución de la República, en Ley Especial de Ocurso de Gracia y en Reglamento internos de las Instituciones antes mencionadas.

11) Un motivo más que no escapa de las razones de la presente solicitud de Indulto es un aspecto muy importante, el cual es el familiar de la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, por cuanto tiene a sus 2 hijos menores de edad y su hermana enferma a su cargo, a

quienes mantenía y ayudaba a su sustento, dado que son personas de escasos recursos económicos.-

12) Otro motivo de INDULTO, que invocamos señoras y señores diputados es que la condenada **C ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, está próxima a cumplir **CUATRO AÑOS DE PRISIÓN**, en la cárcel con mayor hacinamiento de El Salvador, siendo el **CENTRO DE READAPTACIÓN PARA MUJERES DE LA CIUDAD DE ILOPANGO**, el día cuatro de julio del corriente año, es por ello que esta en sus manos que pese a las injusticias expuestas en los numerales que anteceden a éste, que le perdonen la pena de prisión impuesta a **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, por **DESPROPORCIONAL, EXCESIVA, SEVERA** y sobre todo **INJUSTA**, y por no acceder a un beneficio penitenciario por no haber cumplido la mitad de la pena (para gozar de **LIBERTAD CONDICIONAL ANTIPADA**), sino a penas la tercera parte de la pena.-

13) Derechos Humanos vulnerados en razón de lo expuesto anteriormente con la condena impuesta a **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, enumerando los siguientes:

Derecho a un **DEBIDO PROCESO**

Derecho a un **JUICIO JUSTO**

Derecho a la **PRESUNSIÓN DE INOCENCIA**

Derecho a la **LIBERTAD LOCOMOTIVA**

Derecho a la **SALUD**

Derecho a la **FAMILIA** (por haber sido separada de su familia)

III) TRAMITE EN SEDE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Vale mencionar que de conformidad al artículo 39 de la Ley Especial de Ocurso de Gracia, el fundamento del informe que emita la Corte Suprema de Justicia ya sea sobre el Indulto o Conmutación, frente a la conveniencia o no de la concesión de la gracia debe de considerarse en el mismo, que en la comisión del hecho medio algún estímulo poderoso y disculpable, y entre otros el error. En este sentido se puede advertir que la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, pudo haber actuado de manera errónea, esto en virtud de la relación de los hechos o cuadro fáctico por el cual fue condenada, sin embargo el tribunal

condenador solo valoró el resultado siendo la muerte del recién nacido y no acreditó con certeza la acción y en consecuencia la dirección de su voluntad aplicando de esta manera la responsabilidad objetiva, la cual se encuentra prohibida en el Código Penal vigente, en el Art. 4 esto aunado a haber sufrido una complicación obstétrica y debido a ello haber tenido un parto extra hospitalario, lo cierto es que en ningún momento hubo una malicia para hacerle daño a su hija recién nacido, situación que ciertamente fue indebidamente apreciado y que si perfectamente puede dar lugar al fundamento de un informe favorable, debido a que fue condenada por puras presunciones, para condenar a **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**. Pero no obstante la Ley que regula los Ocurros de Gracia, establece "*la Corte Suprema de Justicia podrá basar su informe y dictamen a su juicio prudencial, en razones poderosas de justicia y equidad, distintas de las mencionadas en este artículo*". Esto significa que si el informe citado en este acápite, no se fundamenta en errores en el actuar del Tribunal que condenó a la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, pero si puede ser basado en razones poderosas de justicia y equidad, las cuales en su momento la Honorable Corte Suprema de Justicia puede valorar, verificando el cuadro factico, en un análisis jurídico en el caso en concreto que dio como resultado una sentencia condenatoria en sede judicial, en tal sentido por razones de que la condena ha sido desproporcional, excesiva, severa e injusta en contra de la condenada señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, esto implica que incluso puede ser disculpable, considerando que la referida interna lleva casi de diez años en prisión.-

IV) RESUMEN DE TRAMITE ADMINISTRATIVO EN ASAMBLEA LEGISLATIVA ESTABLECIDO EN LA LEY ESPECIAL DE OCURSOS DE GRACIA.

Este procedimiento de carácter administrativo funciona de la siguiente manera: Una vez presentada la solicitud del Ocurso de Gracia, en este caso **INDULTO**, y analizado en los requisitos formales que exige el Art. 15 de la Ley Especial de Ocurros de Gracia, previo dictamen de la Comisión correspondiente, dará cuenta de la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, para que emita el informe a que se refiere la Constitución de la República, posteriormente La Corte Suprema de Justicia emitirá el informe dentro de un término que no

excederá de treinta días y si fuere favorable a la gracia solicitada expondrá las razones morales, de justicia o de equidad que favorecen el indulto. Además se considerará en todo Indulto, cuando el reo estuviere en prisión, que es el caso de la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, deberá apreciarse el informe del Consejo Criminológico Regional o Nacional, el que será reservado y versará sobre la conducta del condenado, sus antecedentes, su peligrosidad y cuantos datos resulten de su expediente personal o registros respectivos. Este informe será solicitado de oficio por el Órgano Legislativo, inmediatamente que se reciba la solicitud de indulto, una vez recibida la solicitud de dicho informe al Consejo Criminológico deberá remitir el informe solicitado, dentro del plazo de ocho días. Ante el eventual caso que se concediera el indulto será comunicado por parte de la Asamblea Legislativa una vez estuviera vigente el Decreto Legislativo que decretaría la Extinción de la Pena mediante Indulto, a la Corte Suprema de Justicia, la que transcribirá el decreto respectivo al juez que deba darle cumplimiento, es decir en este caso al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador.

V) **PETITORIO:**

Por todo lo antes expuesto y en base a los artículos trece, catorce y quince de la Ley Especial de Ocurros de Gracia a vosotros, con el respeto que os merecéis **SOLICITO:**

1. Se me tenga por aceptada la presente solicitud de **INDULTO**;
2. Se me admitan original y copias de la certificaciones de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, en contra de la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**, la cual consta de 10 folios.-
3. Informe de la Doctora Aleida Marroquín, en el cual explica la definición de **PARTO EXTRAHOSPITALARIO**, tal y como ocurrió con la ahora condenada **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS**.
4. Señalo para oír Notificaciones y recibir citaciones a la siguiente dirección: Calle Gabriela Mistral, Colonia Buenos Aires 2, No.224, San Salvador, El Salvador, o al telefax 2226-0356.

No omito manifestar el agradecimiento generado de antemano por la atención y la celeridad que se le dará al presente caso, tomando en cuenta lo especial del mismo, ya que es importante para los intereses de la señora **ALBA LORENA RODRIGUEZ SANTOS** y su

familia, siendo necesaria la pronta resolución de la situación jurídica en cuanto al Ocurso de Gracia que solicitamos.

San Salvador, Departamento de San Salvador uno de abril de dos mil catorce.

~~Muroz~~

~~Andrés~~

~~Andrés~~

~~Andrés~~

~~Andrés~~

~~Andrés~~

~~Andrés~~

~~Andrés~~

Lima

Li Burgos

